

CRÓNICAS

PREMIO NACIONAL DE PAZ

CRÓNICAS

PREMIO NACIONAL DE PAZ



CRÓNICAS. PREMIO NACIONAL DE PAZ

© Friedrich Ebert Stiftung en Colombia -Fescol-

© C3 - Centro de Competencia en Comunicación
para América Latina y el Caribe

© Marta Ruiz

Calle 71 N° 11-90

Teléfono: 57 (1) 3473077. Fax: 57 (1) 2173115

Correo electrónico: fescol@fescol.org.co

www.fescol.org.co

Primera edición

Bogotá D. C., noviembre de 2010

ISBN: 978-958-8677-02-6

Producción editorial

Éditer Estrategias Educativas Ltda.

ctovarleon@gmail.com

Diseño carátula: Camila Cesarino Costa

Fotografía de carátula: Augusto Rosas

Impresión: Editorial Gente Nueva

Impreso en Colombia / Printed in Colombia

CONTENIDO

PRÓLOGO	
UNA PAZ ESQUIVA	VII
LOS SOBERANOS	1
<i>Patricia Nieto</i>	
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA	19
<i>Nelson Fredy Padilla Castro</i>	
LOS HIJOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO	33
<i>Luis Alberto Miño Rueda</i>	
EL ARDUO CAMINO DE LA RECONCILIACIÓN	53
<i>Margarita Martínez Escallón</i>	
MONTES DE MARÍA: PASÓ LA MUERTE PERO NO EL OLVIDO	67
<i>José Alejandro Castaño</i>	
BATALLA SIN FIN POR UNA FÁBRICA DE CHOCOLATE	79
<i>Marisol Gómez Giraldo</i>	
LOS HIJOS DE LA GAITANA SIGUEN CRECIENDO	89
<i>José Navia</i>	
UNA DIÓCESIS EN MEDIO DEL OLVIDO	103
<i>Alejandra de Vengoechea</i>	
MADRES CORAJE	115
<i>María Teresa Ronderos</i>	

LA FAMILIA AUSENCIA <i>Cristian Valencia</i>	131
CUADROS DE ESPERANZA EN SAN VICENTE DEL CAGUÁN <i>Pilar Lozano</i>	145
EL ENFERMERO DE LOS SECUESTRADOS <i>Alberto Salcedo Ramos</i>	161
“HERMANO PARA SIEMPRE” <i>Marta Ruiz</i>	187
VOLVER A EMPEZAR <i>Sandra Janer</i>	199

PRÓLOGO

UNA PAZ ESQUIVA*

En Colombia se han explorado muchos caminos para la paz. En las últimas dos décadas se han firmado varios pactos de negociación entre grupos armados y gobierno. Han sido, por lo general, acuerdos entre las cúpulas de poder que han llevado en ocasiones a pactos políticos importantes que, sin embargo, no han significado casi nunca la pacificación de los territorios.

El desarme del M-19, el PRT, el EPL, el Quintín Lame, y la CRS a principios de los años noventa desembocó en la transformación del marco institucional del país, con la Constitución de 1991. Sin mediadores, sin sociedad civil, estas negociaciones fueron pactos de desarme a cambio de garantías para la integración a la vida social y política, que se dieron en un clima particular. Veníamos de una violencia atroz y desconocida: la del narcoterrorismo. Indiscriminada, masiva y brutal, había doblegado a una parte del Estado y la sociedad. Por encima de esa violencia anárquica, cuyo móvil era la codicia, emergía una violencia política encarnada en los guerrilleros y en un Estado que había abusado en múltiples ocasiones de su fuerza.

* Las crónicas publicadas en este libro fueron escritas durante el segundo semestre del año de 2009.

En contraste con la mafia, y en clara diferenciación con ella, los insurgentes y el gobierno hallaron en el acuerdo, en la concertación y en diálogo unos puntos de encuentro. La reforma de la Constitución y el mutuo perdón se abrió como camino imperativo para seguir adelante. Los adversarios se reconocieron como tales y se sentaron a la mesa a pactar una nueva constitución. La esperanza de una transición y de un nuevo pacto social colmó por lo menos momentáneamente las expectativas de un país que en ese entonces se identificó con la paz.

Pero la pacificación estaba lejos. No logró que se cerrara el capítulo de la rebelión insurgente. Por el contrario, mientras un sector de la política colombiana se encaminaba hacia el esquivo pluralismo y la consolidación de un Estado de derecho, las guerrillas que siguieron en armas se afincaron aún más en sus estrategias de guerra. Tanto el ELN como las Farc, pero especialmente estas, subordinaron cualquier movimiento y participación política a un plan para la toma del poder por las armas.

De otro lado, una serie de factores confluyeron para que los grupos paramilitares, otrora fraccionados y con dinámicas muy locales, se articularan en un proyecto nacional en el que hicieron simbiosis la violencia del narcotráfico, la de las élites políticas y económicas que se resistían a la modernización del país, y la de sectores derechistas que consideraban que las guerrillas podían ser derrotadas sólo si se las combatía con sus mismas armas.

Fue así como a finales de los noventa, un país bañando en sangre y agobiado por la pesadilla de las masacres, la toma de pueblos, los magnicidios y las desapariciones, se avocaba a una nueva negociación: la del Caguán. El escenario era completamente diferente al anterior. Para las Farc el diálogo no era más que un arma de acumulación en la guerra. Para el Estado, una manera de ganar tiempo y terreno mientras, con el Plan Colombia, las fuerzas armadas retomaban la iniciativa militar.

Mientras este juego de espejos se desarrollaba en los confines del país, con una puesta en escena dilatada y llena de incertidumbre, fuera de ese territorio surrealista donde se negociaba lo innegociable, el país vivía una orgía de muerte. En esos terribles años las víctimas

silenciosas esperaban a ver el desenlace. La geografía del país se transmutaba, con el desplazamiento; los ríos arrastraban decenas y miles de muertos. Los cementerios no podían guardar más sus NN. La esperanza de pacificación se diluyó en nuevas formas de violencia y su extensión a rincones del territorio donde no existía.

La regla general es que la sociedad civil ha sido un convidado de piedra en estas negociaciones, en las que el concepto de reconciliación ha sido apenas mencionado. El concepto de la paz como un pacto de élites ha sido revaluado por la experiencia. En Colombia cada pacto ha dejado violencias residuales que han hecho imposible el desarme total. Y ello ha sido así desde el Frente Nacional, firmado para ponerle fin a la guerra política con la alternancia del gobierno, y bajo cuya sombra creció la guerra insurgente, pasando por la negociación con las guerrillas de los años ochenta, cuyo legado tardío fue la nueva Constitución, pero que, por ser un pacto inconcluso e imperfecto, dejó abiertas las puertas de la guerra, que se agudizaría y tocaría fondo desde mediados de los noventa.

Quizá por esa triste condición, la sociedad civil empezó a crear sus propias experiencias de paz, muchas veces en contra del gobierno, que monopoliza este tipo de búsquedas. La idea de que las comunidades pueden hacer mucho por la paz, sin anuencia ni apoyo del Estado ha resultado incómoda en muchos momentos, pero ha mostrado un camino que tarde o temprano será valorado como lo que es, el cimiento de la reconciliación. Han sido personas anónimas, valientes y bien intencionadas quienes desde diferentes puntos de la geografía han hecho un concepto de paz integral que incluye frecuentemente el desarrollo, la búsqueda de un ejercicio pluralista y sano de la política y los derechos humanos. Miles y decenas de estas experiencias han florecido en el país, aún en los momentos más aciagos de la violencia. Se mantienen a pesar de los embates que reciben de los grupos violentos, o incluso a pesar de las propias desavenencias que surgen en su interior, como es natural en las obras humanas.

Justamente el Premio Nacional de Paz surge como un reconocimiento a la paz y la reconciliación que se construyen desde la base, en lo local, y no a la paz maximalista, tan esquiva como errática en el país.

Hay que reconocer que muchos de estos proyectos han estado animados, abiertamente o tras escena, por miembros de la Iglesia. Sacerdotes, monjas y grupos religiosos que han sido más que una mano amiga, casi un Estado de bienestar en zonas inhóspitas y olvidadas donde sólo ha llegado el hacha del colono, la coca, la violencia de los grupos armados y la bota militar del gobierno.

La mayor parte de los premios han sido otorgados en un período en el que desde el gobierno, y en especial el de Álvaro Uribe Vélez, se niega la existencia del conflicto y, por ende, de la negociación, y el país le ha apostado todos sus esfuerzos económicos y políticos a aceptar su maquinaria de guerra, confiado en que la Seguridad Democrática podrá derrotar a los grupos armados. Las comunidades muestran otra realidad y otro camino. Otra realidad, porque dan cuenta, como lo hace este libro, de que la crisis humanitaria persiste y las poblaciones están amenazadas por muchas fuentes de violencia nuevas y antiguas. Las mismas Farc que se dan por derrotadas, y los mismos paramilitares que se dan por desmovilizados.

Por eso, sin excepción, el relato presente de cada uno de los proyectos premiados es de lucha. Por la supervivencia, por la legitimidad, por abrirse espacio y ser visible en medio de una nube discursiva que niega el conflicto que ellos viven cada día.

Las comunidades han mostrado un camino diferente al de la muerte. Han construido conceptos más participativos de la seguridad y han elevado ideales como la democracia, el bienestar colectivo y el pluralismo, como estandartes de sus organizaciones. También hay individuos a los que se les ha premiado justamente porque su labor solitaria y tenaz se ha convertido en paradigma y ejemplo de resistencia o solidaridad.

No puede decirse que los premios de paz hayan logrado la pacificación de sus regiones. Sería mucho pedir. Pero sí han trazado una ruta y se han convertido en la primera piedra que tarde o temprano servirá para edificar un proyecto de reconciliación nacional. Un horizonte que parece todavía lejano.

MARTA RUIZ
EDITORA

EL ARDUO CAMINO DE LA RECONCILIACIÓN

MARGARITA MARTÍNEZ ESCALLÓN*

La Asociación de Municipios del Alto Ariari, ganadora del Premio Nacional de Paz en el 2002, es un ejemplo de que la paz se hace justamente entre contrarios, entre enemigos y personas que se mantienen en la diferencia. Municipios influidos históricamente por grupos armados enfrentados intentaron mantener la convivencia pacífica y trabajar juntos por el desarrollo. Pero la reconciliación se ha visto saboteada. Aún así, el esfuerzo continúa.

* Margarita Martínez, periodista y documentalista. Es abogada de la Universidad de los Andes, con maestría en Periodismo y relaciones internacionales de Columbia University, en Nueva York. Fue corresponsal de la *Associated Press* en Bogotá por siete años, hasta el 2006, cubriendo principalmente temas de conflicto. Antes se desempeñó como asistente de producción de la cadena televisiva *NBC* en Nueva York. Su trabajo más conocido es el documental *La Sierra* que recibió numerosos premios internacionales. Martínez dirigió también *La batalla del silencio* y realizó *En la tierra del miedo*, el capítulo colombiano de una serie mundial sobre derechos sexuales y reproductivos de la *BBC*. Acaba de terminar *Robatierra*, un documental sobre el movimiento indígena de los Nasa del Cauca y su lucha por la tierra, realizado en compañía con Miguel Salazar. Martínez es docente del módulo de documental de la Especialización de Periodismo de la Universidad de los Andes y fue Nieman Fellow, en la Universidad de Harvard, entre el 2008 y el 2009.

Los pueblos de El Castillo y El Dorado se odiaban a muerte. Literalmente a muerte. Los cuerpos sin vida que se encontraban en el camino que los unía eran testimonio de la intensidad de ese sentimiento. El miedo y la zozobra que sentían mutuamente cuando se tropezaban los pobladores de varios de estos municipios del Alto Ariari, en el Meta, impedían el comercio, proyectos regionales y hasta verse con viejos amigos o familiares.

—A mi me tocó cuando eso por acá era bien pesado, uno no podía salir por allá. Hoy en día ha habido un cambio muy berraco. El proceso y el premio ayudaron mucho —dice Hernán Gutiérrez, deportista consumado y quien participa en cuanto campeonato de fútbol se realiza en la zona.

A la mayoría le parecen tan lejanas esas historias, que Gutiérrez dice que los jóvenes ni saben que en un partido entre los dos municipios en 1984 correataron a hachazos a los jugadores de El Dorado que escaparon con vida. Tampoco que la vía petrolizada, el puente entre El Castillo y Lejanías, el internado donde estudian habitantes de uno u otro pueblo e incluso el intercambio de semillas, fueron un gran logro de integración que incluyó esfuerzos de la Gobernación, del Ministerio del Interior y de la Organización de Naciones Unidas.

—Cuando llegamos a la Gobernación vimos que no había posibilidades de construcción de proyectos regionales, acueductos, de intercambios, de nada, a no ser que se solucionara la vieja enemistad entre El Castillo y El Dorado —dice Alan Jara, gobernador del Meta entre 1998 y el 2000, quien estuvo siete años y medio secuestrado por las Farc.

El sacerdote Crisanto Ramos, Consejero de Paz de la gobernación de Jara y su asesor, Gonzalo Agudelo, iniciaron en 1998 la tarea quiijotesca de reconciliar a estos pueblos rivales desde la época de la Violencia, cuando unos estaban alineados con el partido Conservador y los otros con el Liberal.

En la década de los ochenta volvió la estigmatización en una especie de reedición de esa guerra. El Castillo y Lejanías eran municipios comunistas, con alcaldes de la Unión Patriótica y con fuerte influencia de las Farc. Por su parte, El Dorado estaba catalogado como un pueblo conservador, que tenía una organización de autodefensas propia, que no estaba relacionada con el resto de grupos paramilitares que después confluyeron en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lideradas por Carlos Castaño.

—En este proceso se arriesgó todo —dice el padre Ramos—. Nosotros y los alcaldes abrimos la puerta, pero fue la gente la que arriesgó la vida para ir a las reuniones, regresar al atardecer cuando esa vía era un peligro, para dejar esos odios atrás, para tener el derecho de vivir en paz al margen de los armados. Los escollos de dudas, el miedo y la presión de los grupos armados para sabotear el proceso eran constantes.

Laura Gilma Moreno, alcaldesa de El Castillo entre el 2001 y el 2003, recuerda como uno de los peores días de su mandato, cuando de regreso de un encuentro deportivo en El Castillo, las Farc bajaron del bus a dos futbolistas de El Dorado y los secuestraron. —Quise morirme cuando me dieron esa noticia. Arranqué a donde me dijeron que estaba la guerrilla y luego de pasar por cientos de cabezas de ganado que habían robado a los municipios vecinos, pude hablar con el comandante —recuerda Moreno.

El jefe guerrillero le dijo que no tenía en su poder a los muchachos pero se comprometió a averiguar. La presión de la comunidad y de la alcaldesa hizo que a los cuatro días los dejaran libres, y así se salvó otro obstáculo del proceso.

Quince días antes de la entrega del Premio Nacional de Paz asesinaron al personero de El Castillo, Mario Castro, miembro de la Unión Patriótica (UP), en lo que fue otro golpe grave contra el proceso. Castro fue uno de los centenares de miembros de la UP que murieron en este período.

—Las provocaciones contra la paz entre civiles eran cosa diaria, pero el intercambio de bienes y afectos se iba consolidando —recuerda el sacerdote Ramos. —La gente se empezó a mirar a los ojos y fueron desvaneciéndose los odios inculcados por generaciones —agrega la alcaldesa Moreno. Ella reemplazó a Gilberto Marín, el alcalde que se entrevistó por primera vez con su contraparte de El Dorado, Euser Rondón, en 1998. Con este encuentro se inició el proceso de convivencia entre las dos comunidades.

Pero mientras entre la población de estos municipios empezó a sentirse la paz, la situación institucional era caótica. Varios de estos alcaldes —como muchos del país— recibieron amenazas de las Farc que los obligaron a abandonar sus pueblos. Casi una decena fueron asesinados. Hasta la Alcaldía de El Castillo estuvo cerrada por tres meses y la Alcaldesa tuvo que refugiarse en Villavicencio.

UN PREMIO EN MEDIO DE LA DISPUTA

El Premio Nacional de Paz por este proceso de reconciliación lo recibió en el 2002 la Asociación de Municipios del Alto Ariari (AMA) en cabeza de su presidente, Henry Beltrán, alcalde de Lejanías, y de Euser Rondón, en ese momento ex alcalde de El Dorado.

Beltrán, quien actualmente repite como alcalde de Lejanías, afirma que los logros del proceso de reconciliación resistieron todos los embates, incluso el del propio galardón. —Cuando nos ganamos el premio hubo críticas en el sentido de que la mejor manera de acabar un proceso es premiarlo, porque se daña o se acaba. Gracias a Dios, ese no fue nuestro caso.

En el Alto Ariari se pasó de hablar de reconciliación, a hablar de proyectos productivos, de fiestas regionales, de vida en común, cuenta Beltrán. Tanto así que los 50 millones del premio fueron aprovechados en parte por los alcaldes del siguiente periodo para viajar y hacer contactos internacionales con agencias de cooperación y ONG que hoy son socios fundamentales en varios de los proyectos agrícolas que se desarrollan en los municipios.

Alan Jara, el gobernador que impulsó todo el proceso, había sido secuestrado el 15 de julio del 2001 cuando asistía a uno de los

actos culminantes de reconciliación entre las comunidades de este lugar donde mueren los Andes y empieza la llanura. El acto era la inauguración del “Puente de la Reconciliación”, que luego de años sin terminar, unió a Lejanías con los municipios de El Castillo y El Dorado, y era parte fundamental en este esfuerzo de dejar los odios atrás.

Jara conocía de las amenazas de las Farc, pero la importancia del acto y la protección de la ONU fueron suficientes argumentos para sentirse seguro y asistir. Pero ni los ruegos de los diplomáticos, ni los de las comunidades que asistieron a este acto de paz lograron disuadir a las Farc de secuestrarlo. Lo bajaron de un carro de la ONU y se lo llevaron. Cuando la AMA recibió el Premio llevaba 16 meses secuestrado.

—Cuando oí del premio por la radio en la selva, me emberraqué —dice Jara con una amplia sonrisa que no lo abandona desde el 3 de febrero del 2009 cuando fue liberado—. Lo que nosotros queríamos era fortalecer la institucionalidad, abrir espacios de democracia y el premio se lo entregaron más que a las comunidades, a los políticos.

El padre Ramos dice lo mismo pero de otra manera. —Hubiera sido más interesante si el premio hubiera sido para los actores esenciales y no para protagonistas políticos. —El sacerdote dijo que no asistió a la entrega del galardón como una protesta personal.

El Premio Nacional de Paz en el 2002 se dió en un contexto político y humanitario crítico para el Alto Ariari. La región colindaba con la zona de 42.000 kilómetros que durante tres años estuvo desmilitarizada por el gobierno para negociar con las Farc. En febrero de ese año se rompieron los diálogos en medio de una gran frustración nacional. La guerrilla había atacado los cascos urbanos de casi todos los municipios del Alto Ariari, destruyó parte de su infraestructura, y se pavoneaba por todo lado. Las autodefensas de Martín Llano operaban en algunas zonas, lo mismo que los “Carranceros”, como se conoce a la gente del cuestionado esmeraldero Víctor Carranza. El narcotráfico continuaba en su apogeo y era el motor de las finanzas de los grupos ilegales.

A ese panorama de guerra se agregaron nuevos paramilitares, venidos de Antioquia. En mayo, el Bloque Centauros, al mando de

Miguel Arroyave, incursionó en la zona con un numeroso ejército. Se dice que Arroyave, oriundo de Amalfi, Antioquia, como los Castaño, le compró por seis millones de dólares la franquicia del bloque a Vicente, hermano de Carlos, quien era el jefe visible de las Autodefensas Unidas de Colombia.

En agosto del 2002, cuando Álvaro Uribe se posesionó como presidente de Colombia con su bandera de la seguridad democrática todos los indicadores de violencia estaban disparados. Los homicidios, en particular, se habían multiplicado por cuatro, según cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.

El 2003 fue muy difícil para el Meta. Mientras la tasa nacional de homicidios era de 52 por cada cien mil habitantes, la del Meta era de 105. El departamento tenía el tercer índice más alto de secuestros, después de Antioquia y Bogotá, sólo que con menos de la mitad de la población de aquellas ciudades. Los paramilitares influían de manera determinante en las decisiones locales y del departamento, que recibe millonarias regalías petroleras desde hace casi una década. Este año las regalías que recibirá Meta están calculadas en 500 mil millones de pesos.

Así como antes lo hizo la guerrilla, los paramilitares desviaron los recursos públicos hacia sus arcas, influyeron en el nombramiento de alcaldes y otros funcionarios y amenazaron y asesinaron a quienes se interpusieran en su camino. En medio de ese clima, el proceso de reconciliación de los municipios del Ariari recibió duros golpes.

LA PELEA POR LA GOBERNACIÓN

Euser Rondón había sido acalde de El Dorado entre 1998 y el 2001 y, como se dijo antes, acudió a la cita con el alcalde de El Castillo que sirvió para empezar a hablar de reconciliación. Su acto fue considerado como valiente, y eso le dio confianza e impulso al proceso.

Rondón adquirió gran visibilidad en el departamento con el Premio Nacional de Paz. Y la aprovechó para lanzarse a la gobernación con la bandera de la reconciliación en una campaña pugnaz, en un ambiente político caldeado.

Varias de las personas que participaron en el proceso del Alto Ariari lo acompañaron en sus aspiraciones políticas. Henry Beltrán, alcalde de Lejanías, uno de los pueblos vecinos y también beneficiario del premio, fue uno de ellos. —El proceso de reconciliación nos dio la esperanza de que podíamos transformar la vida de los metenses, de llevar la paz —dijo Beltrán.

Pero Rondón era visto como el ex alcalde de un municipio “paraco”, con lazos personales y familiares con ese grupo armado y fuertemente financiado por ellos. En un clima de campaña de acusaciones de grueso calibre que produjeron incluso riñas con muertos, el contrincante de Rondón, Edilberto Castro, lo tildó abiertamente de ser el candidato “para”. A lo que Rondón contrapunteó: —Si, soy para..., para luchar contra la corrupción —y arremetió contra Castro: lo acusó de enriquecerse a punta de contratos con el Estado.

En medio de circunstancias dudosas, Rondón perdió las elecciones de gobernación para el periodo del 2004-2007. Cuando se había escrutado un poco menos del 80 por ciento de los votos, se fue la luz en la Registraduría de Villavicencio. En ese momento, Rondón le llevaba una ventaja de 14.500 votos a Castro. Luego de 12 minutos de apagón, las cosas cambiaron radicalmente. Castro apareció con una ventaja de 5.000 votos y ganó.

Rondón estaba seguro de que le habían robado la gobernación e inició una demanda ante el Consejo de Estado contra la elección de Castro. Meses después interpuso otra demanda ante la Procuraduría por irregularidades en un contrato de *kits* escolares.

Testimonios recogidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia contra Castro, hoy condenado por la justicia, dicen que este les ofreció a los jefes paramilitares un porcentaje en la contratación oficial a cambio de que “quitaran del camino” a Rondón¹.

Varios paramilitares desmovilizados han hablado ante la justicia sobre una reunión en la que Miguel Arroyave, jefe del Bloque Centauros, ‘Don Mario’, segundo al mando de ese mismo bloque, y Víctor Carranza le habrían dado un ultimátum a Rondón para que

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso 26450, 8 de noviembre 8 de 2007.

desistiera de las demandas contra Castro, ofreciéndole a cambio una gruesa suma de dinero.

Según José Raúl Mira, un veterano de las estructuras de las AUC y escolta de algunos de los jefes de las autodefensas, a Rondón le ofrecieron 3.500 millones de pesos. Pero aún así se negó a retirar la demanda. Esta actitud molestó a los paramilitares, según el testimonio recogido en Verdad Abierta². Mira se convirtió en uno de los testigos estrellas de la Fiscalía, hasta que fue asesinado en mayo del 2008.

Beltrán corroboró que estos ofrecimientos existieron. —El jefe paramilitar (Arroyave) llama a Euser y dice que dejemos las cosas así, y que nos reconciliemos con el nuevo gobierno, que se cancelan las deudas de la campaña —cuenta Beltrán.

Este ultimátum coincidió con la visita de Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y Ernesto Báez al Congreso, el 28 de julio de 2004. Los jefes paramilitares les exigieron a sus políticos aliados que llevaran manifestantes al Capitolio como demostración de apoyo a las AUC. Rondón aprovechó la comitiva para protestar ante el Consejo de Estado por la demora en resolver la demanda contra Castro. Esto desató la ira de Vicente Castaño, Don Mario y Arroyave, según testimonios recogidos en Verdad Abierta.

El ambiente se caldeó aún más cuando el diario *El Tiempo* publicó un artículo titulado “La delicada paz del Alto Ariari”, en el que se afirmaba que Arroyave y su Bloque Centauros habían copado los cascos urbanos de los municipios del Alto Ariari, algo que no se conocía nacionalmente en toda su dimensión, y que implicaba de alguna manera a la AMA, receptora del Premio.

Después de esta publicación, el ex asesor de paz de la gobernación del Meta y en ese momento asesor del PNUD, Gonzalo Agudelo, citado en el artículo, tuvo que salir del país por amenazas de los paramilitares.

Una semana después, los alcaldes mandaron una cuestionada carta de rectificación al diario. Henry Beltrán dice que ellos

2 [Www.verdadabierta.com](http://www.verdadabierta.com) es un portal de internet de *Semana* y la Fundación Ideas para la Paz.

redactaron unas aclaraciones, pero que los “paras” agregaron tres líneas, en las que afirmaban que las AUC habían llegado al Llano porque las comunidades las llamaron. Esto enrareció aún más el difícil ambiente político.

LA MUERTE SE HIZO REALIDAD

Las amenazas contra Euser eran constantes, recuerda su viuda, la hoy Representante a la Cámara por el Meta, Fabiola Olaya. —Le pedimos que se cuidara, que retirara las demandas. Él nos dijo que no iba a hacer como hace todo el mundo, que es quedarse callado, que él iba a luchar y que la justicia le iba a dar la razón —dice Olaya, quien prefirió no hablar sobre los posibles autores intelectuales del crimen.

En la primera victoria judicial de Rondón, la Procuraduría suspendió del cargo al gobernador Castro por el contrato de los *kits* escolares. Entonces Arroyave citó a Rondón. El 13 de septiembre del 2004, Euser como casi todos los días de esa época de acciones judiciales, salió con un morro de papeles de pruebas para sustentar sus demandas. Habló en la tarde con su esposa y le dijo que tenía una reunión y que después le contaba con quién.

Rondón acudió a la cita en una finca de la sabana de Bogotá con dos miembros de su equipo político: Javier Sabogal y Nubia Sánchez. Los tres aparecieron al otro día muertos en el baúl de un carro.

El asesinato de los políticos conmovió profundamente al Meta. Pero también estremeció los cimientos del proceso paramilitar que se desarrollaba entre los paramilitares y el gobierno en Santa Fe de Ralito, Córdoba. En el Meta, su muerte dividió a los paramilitares entre leales o paisas —que estaban con Arroyave— y disidentes o llaneros —que encabezaban mandos medios—.

Arroyave, que era uno de los negociadores en la mesa de Ralito, pidió permiso para salir del área de diálogo e ir al Meta para coordinar la desmovilización del Bloque Centauros. El 19 de septiembre, seis días después del asesinato de Rondón, Arroyave moría en una emboscada fraguada por sus propios hombres, obedeciendo órdenes de ‘Cuchillo’, un conocido paramilitar del Llano.

Al cabo del tiempo, Edilberto Castro –que ahora goza de casa por cárcel en Bogotá– fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato de Euser Rondón. El ex senador Luis Carlos Torres, vinculado a un proceso judicial por para-política, también está siendo investigado por estos asesinatos. Pero todavía hay toda clase de conjeturas e hipótesis sobre los otros autores intelectuales de la muerte de Rondón.

DESMOVILIZACIÓN SIN RECONCILIACIÓN

En septiembre del 2005 se desmovilizaron unos 1.100 miembros del Bloque Centauros, dentro del proceso masivo de desmovilización de las fuerzas paramilitares en todo el país, iniciado en diciembre del 2003. Para entonces, las llamadas Autodefensas del Meta y Casanare, al mando de Martín Llanos, habían sido derrotadas por el Centauros, después de una guerra salvaje, en la que hubo batallas, como la de La Cooperativa, en Mapiripán, donde, según la revista *Semana*, hubo 800 combatientes de ambos bandos. No obstante, muchas personas han denunciado que el Bloque Centauros contó con apoyo del Ejército e incluso, de la Fuerza Aérea para aniquilar a los hombres de Llanos.

Poco después del desarme, en el Meta empezó a sentirse algo parecido a la paz. Los indicadores de violencia bajaron de manera drástica. La gente retornó a sus fincas a sembrar arroz, maíz, frutas, verduras y criar diferentes animales. El valor de las tierras, que antes habían sido abandonadas o vendidas a precio de huevo, se disparó. La autopista Villavicencio-Bogotá, otrora escenario tenebroso de secuestros masivos hechos por las Farc, se normalizó a tal punto que hasta se la puede usar de noche.

En el Alto Ariari se empezó a vivir con tranquilidad por primera vez en mucho tiempo, no sólo entre las comunidades, sino también en la política y en el plano militar. La producción agrícola volvió a crecer en estos municipios del piedemonte llanero, de variados climas.

—Las condiciones de seguridad permitieron desarrollar e implementar proyectos productivos, de capacitación, programas

de género, fortalecimiento de organizaciones de campesinos, de reintegrados —dice Carlos Andrés Sarmiento, director ejecutivo de la AMA.

Tanto es así que en lugares que eran campamentos de las Farc, ahora se hace *rafting* y se está empezando a promover el turismo. Estos proyectos son financiados con recursos de la Unión Europea, de una ONG austriaca, de la ONU y de varias entidades gubernamentales.

Sin embargo, en los últimos meses se han presentado incidentes que recuerdan el pasado. Las Farc, luego de una retirada total, están nuevamente en acción. El presidente del concejo municipal de El Castillo fue asesinado el 30 de septiembre de este año, aparentemente por ese grupo armado.

La guerrilla hace presencia en la parte alta del municipio y esporádicamente se la ve en las veredas cercanas al casco urbano. En el primer semestre del año quemaron un bus en la vía entre El Dorado y El Castillo, lo que inquieta a la gente.

Después de asesinar a Arroyave, ‘Cuchillo’ se quedó con las rutas y los negocios del narcotráfico y se dice que está armando un gran ejército, reclutando combatientes nuevamente y que es socio de las Farc en la producción de cocaína. Eso a pesar de que los cultivos ilícitos en el Meta han disminuido en los últimos años.

También se dice que ‘Martín Llanos’, de quien no se había vuelto a saber nada desde su derrota, volvió a la zona después de estar refugiado fuera del país, y se oyen rumores de que está reclutando viejos y nuevos combatientes.

El tema de tierras es delicado en la región. Aunque no hay estadísticas, sí existe la percepción de que los “paisas” se quedaron con las mejores tierras y hay mucho capital del narcotráfico que se ha legalizado con compra de fincas y ganado. También hay expectativa por la gran compra de tierras que hicieron empresarios del Valle del Cauca para producir biocombustible. Algunos piensan que es una gran oportunidad de negocios y otros lo ven como un megaproyecto que produce poco empleo y desplaza a los llaneros.

En la vía a Puerto Lleras se produjo hace pocos meses un atentado contra Víctor Carranza, el poderoso zar de las esmeraldas, de quien se dice es dueño de medio Llano. Las autoridades han señalado

a 'Cuchillo' como el más seguro autor del intento de homicidio y por eso se teme una nueva confrontación entre grupos armados.

LA MIRADA DE JARA

Alan Jara, ex gobernador del Meta que estuvo siete años y medio como "rehén político" de las Farc, tiene una visión particular de lo que está pasando hoy en su departamento, después de volver de su aislamiento en la selva: —Encuentro un departamento radicalizado, en el que cambiaron las fronteras de influencia de los paramilitares y la guerrilla; con las Farc perdiendo terreno y cada vez más al sur.

La reconciliación sigue siendo hoy, como cuando impulsó el proceso de los municipios del Alto Ariari, una de las principales preocupaciones de Jara. Cuenta que en estos pocos meses de libertad, luego de que las Farc lo entregaron a una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja y a Piedad Córdoba, han venido a verlo más de 150 personas que le preguntan si vio o escuchó a algunos de sus familiares secuestrados o desaparecidos por la guerrilla.

Piensa que, tal como ocurrió hace años en El Dorado y El Castillo, cuando la gente sintió la necesidad de reconciliarse, los colombianos quieren profundamente también vivir la reconciliación: —todavía hay demasiadas heridas sin cicatrizar y hay que trabajar por eso.